

CUARTO TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO

M.P C/ BRAYAN RAFAEL TORRES RANDON

MICROTRÁFICO Y OCULTACIÓN DE IDENTIDAD 496 N°5 del CP.

RUC N°2300487212-6

RIT N°207-2024

Santiago, cinco de julio e dos mil veinticuatro.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Individualización de la causa, intervinientes y tribunal. Que con fecha uno de julio del año en curso, ante este Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en sala integrada por las magistradas, Cecilia Toncio Donoso, como juez presidente de sala, Irene Rodríguez Chávez, como juez integrante y Carolina Escandón Cox, como juez redactor, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral en rol interno N°207-2024, seguida por el Ministerio Público representado por la fiscal adjunta Viviana Vergara Ayala, en contra de **BRAYAN RAFAEL TORRES RENDÓN**, cédula nacional de identidad N°14.880.497-4, nacido en Venezuela el 09 de diciembre de 1997, 26 años actuales, soltero, trabajador de delivery, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°4320, departamento 811, comuna de Estación Central, quien fue asistido por el defensor penal público, don Franco Lobiano Barría. Ambos letrados con forma de notificación especial registrado en la causa.

SEGUNDO: Objeto del juicio. La acusación, objeto del juicio fue la siguiente:

EL Ministerio Público planteó los siguientes **HECHOS:**

“El día 4 de mayo de 2023, alrededor de las 17:00 horas el acusado Brayan Rafael Torres Randon fue sorprendido arrojando elementos al interior de la Penitenciaría y al ser controlado por personal policial negó identificarse en reiteradas oportunidades, por lo que al registro de sus vestimentas fue sorprendido guardando, poseyendo y transportando con el ánimo de traficar un envoltorio de nylon transparente contenedor de sustancia beige que arrojó coloración positiva para pasta base de cocaína con un peso de 20,5 gr.”

Estimó que dichos hechos son constitutivos de los siguientes ilícitos:

- Delitos de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley N° 20.000 en relación al artículo 1 del mismo texto legal.
- El delito de ocultación de identidad, previsto y sancionado en el artículo 496 N° 5 del Código Penal.

Atribuyéndole participación en calidad de autor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal en ambos delitos y teniendo presente que los ilícitos se encuentran en grado de consumados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 y 496 N° 5 del Código Penal y a los artículos 3 y 18 de la Ley 20.000, postulando que concurre la circunstancia agravante de la responsabilidad prevista en el artículo 12 N° 16 del Código Penal y aquella del artículo 19 letra h) de la Ley 20.000 y en base a los preceptos legales que cita, el Ministerio Público solicita se imponga a Brayan Rafael Torres Randon la pena de **cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y una multa de 40 Unidades tributarias mensuales**, por el delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 4° de la Ley 20.000 y por el delito de ocultación de identidad **la pena de 4 Unidades Tributarias Mensuales**, más las penas accesorias legales,

determinación y registro de huella genética, el comiso de las especies y las costas de la causa.

Finalmente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 19.970 sobre Sistema Nacional de Registros de ADN, solicita determinar la huella genética del condenado, previa toma de muestras biológicas, y ordenar la incorporación de dicha huella genética al Registro de Condenados.

En su intervención inicial, la fiscal ratificó su acusación, precisando que el acusado intentó efectuar un ingreso de drogas a un recinto penitenciario, lo que coloquialmente se llama “peloteo”, siendo sorprendido en flagrancia, ejecutando el delito por personal del carabineros. Al ser fiscalizado, el acusado se negó a individualizarse y por eso también fue detenido. Además de las agravantes inherentes al delito el acusado tiene reincidencia y tenía decreto de expulsión vigente circunstancia que corroborarán los funcionarios de carabineros que declararán, que intervinieron en el procedimiento y que incautaron en poder del acusado la droga no dosificada, en una modalidad que es habitual, envuelta en papel alusa, lo que la hace incompatible con una eventual circunstancia de consumo. Añadió que con la prueba documental y pericial se acreditaría la naturaleza y pureza de la pasta base de cocaína con un 78% de pureza y su pesaje de 20 gramos y fracción.

TERCERO: Posición de la defensa: Por su parte el abogado defensor anunció que instaría por la absolución de su representado por ambos delitos por los que se le formuló cargos. Llamó al tribunal a poner especial atención en que los indicios eran insuficientes para haber procedido a ejecutar el control de identidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 85 del Código Procesal Penal y encontrar en su poder las sustancias ilícitas. La ausencia de elementos que corroboran los delitos, llevará necesariamente a la absolución.

En las instancias finales de juicio, ambos intervinientes insistieron en sus pretensiones estimando probadas sus promesas iniciales, conforme a las observaciones a la prueba que se desarrollarán en el acápite relacionado a la ponderación de la prueba.

CUARTO: Declaración Del Acusado. Que previamente advertido de sus derechos en juicio, el acusado **Torres Randon**, renunció a su derecho a guardar silencio y declaró como medio de defensa que: el día 4 de mayo de 2023, estaba en calle Pedro Montt de esta comuna, haciendo una compra de pasta base para su consumo porque era consumidor de esa droga, cuando intervinieron dos carabineros y una patrulla de seguridad ciudadana. Él les señala que no tenía documentación de identidad, pero les dictó su número de identidad y le dicen que no era esa. Estando en la comisaria, le verificaron sus huellas y se dieron cuenta que sí era correcto el número de rut que les había indicado.

Tenía la droga en su poder para su consumo y eso fue todo.

Precisó que la forma de consumo de esa droga es con pipa y ceniza y el efecto dura unos cuatro o cinco minutos. La cantidad de droga que mantenía la podía consumir en el transcurso de 12 horas, es decir, en una noche.

Instado por la fiscal aseguró que era la primera vez que declaraba y que daba a conocer su versión. La droga la compró a una persona que no le dio su nombre, por la aplicación “GRINDR, se puso de acuerdo con la persona que la vendía que se identificaba como “Pasta”, en juntarse en Pedro Montt con Luis Cousiño, es decir en las inmediaciones de la Ex Penitenciaría, que es un edificio verde, en que observó que salían y

entraban Gendarmes. En esa fecha tenía una cédula de identidad chilena por canje penal, pero no la traía consigo físicamente ni se sabía el número, por eso no se lo dio a carabineros. No andaba con documento de identidad alguno, ni pasaporte ni nada.

Ingresó a Chile fue por paso legal Chacalluta, sin visa porque no la pedían.

En 12 horas se consume esos 20 gramos y nunca ha tenido problemas de salud por ese consumo.

QUINTO: Convenciones probatorias. En su oportunidad, los intervinientes no se acordaron convenciones probatorias.

SEXTO: Etapa de prueba. Que el Ministerio Público rindió prueba testimonial, consistente en los dichos de los funcionarios de carabineros que intervinieron en calidad de aprehensores, NÉSTOR ANDRÉS MORENO ZUÑIGA y PATRICIO RAFAEL LOYOLA ARAVENA además del funcionario de la Sección de Investigación Criminal de Carabineros (SIP), NICOLÁS CISTERNAS DURÁN, respecto a una diligencia tendiente a determinar la naturaleza de la sustancia incautada.

Además se incorporó prueba documental, pericial y otros medios de prueba, mientras que la defensa hizo suya dicha prueba y no presentó otra de manera independiente.

SÉPTIMO: Hecho Acreditado. Que ponderados todos los medios de prueba aportados, de conformidad con los parámetros que mandata la ley en el artículo 297 del Código Procesal Penal, el tribunal arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable, que:

El día 4 de mayo de 2023, alrededor de las 17:00 horas, Brayan Rafael Torres Randon fue sorprendido por personal policial intentando arrojar objetos al interior de la Penitenciaría y al ser controlado, negó identificase en reiteradas oportunidades, por lo que al registro de sus vestimentas fue sorprendido guardando y poseyendo, con el ánimo de traficar, un envoltorio de nylon transparente contenedor de una sustancia beige que resultó ser pasta base de cocaína con un peso de 19 gramos netos.

OCTAVO: Ponderación de los medios de prueba. Para así decidirlo, el tribunal contó con la declaración de los tres funcionarios de carabineros que intervinieron en el procedimiento policial que culminó con la detención del acusado, dando cuenta que éste se originó a propósito de un patrullaje preventivo focalizado que efectuaban en el sector descrito en la acusación. Según explicaron, evidenciaron la comisión de un delito de manera flagrante mientras ejercían labores propias de su cargo, especialmente dirigidas en ese momento a prevenir la ocurrencia del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en los recintos penitenciarios ubicados en la Avenida Pedro Montt, por las incipientes denuncias que existían en relación a los denominados “peloteros”, como coloquialmente se les denomina a las personas que habitúan lanzar droga u otros elementos ilícitos hacia el interior de dichos recintos de detención.

Particularmente, el cabo segundo de carabineros **Néstor Moreno Zúñiga**, con 10 años de servicio, refirió que el día 4 de mayo de 2023 iba en un patrullaje municipal junto al sargento Loyola, alrededor de las 5 de la tarde, como obligación, por fuera de la Ex Penitenciaría ubicada en Avenida Pedro Montt por el tema de “los peloteros”. Al llegar a Pedro Montt a la altura del número 1902, observaron a una persona lanzando objetos al interior del recinto de Gendarmería, por lo cual bajaron a fiscalizarlo. Al acercársele, esta persona guardó un objeto entre sus ropas, le preguntaron su identidad, no quiso identificarse, le consultaron varias veces y como no

obtuvieron respuesta, procedieron a la detención por la ocultación de identidad. Luego estando en la unidad, procedieron a revisar sus vestimentas y esta persona mantenía un envoltorio en papel alusa con una sustancia que luego fue enviada a peritaje por parte de la SIP de Carabineros que dio resultado positivo para cocaína. Luego mostró un documento dónde constaba cómo se identificó ante un tribunal como Brian Torres Randón y un rut de venezolano, pero en ese momento no tenían sistema biométrico funcionando, así que se le pidió a la Policía de Investigaciones información al respecto y ellos le informaron que esta persona estaba irregular en Chile y con orden de deportación.

Explicó respecto a la denominación de “peloteros”, a la gente que según denuncias y reclamos de vecinos, se ubicaba en la plaza de calle Pedro Montt, donde estaba el acusado a hacer “pelotas” y tirarlas al interior de la ex Penitenciaría. Por eso es por lo que efectuaban ese servicio de patrullaje focalizado y por eso el nombre. Como iban patrullando, justo lo vieron lanzando pelota al interior del recinto y dado que no andaban en un carro policial sino que municipal, esta persona no advirtió la presencia de personal policial. Justo iban pasando por Pedro Montt y lo fiscalizaron. Preciso que el sujeto no quiso identificarse, pese a que le advirtieron que si no se identificaba lo iban a detener. Posteriormente, el suboficial Patricio Loyola lo registró, no obstante él presencié dicho registro y le encontraron un envoltorio, tipo ovoide con una sustancia dura, café, envuelta en papel alusa que se ocupa en la cocina. Según su experiencia, esa sustancia café pensó que era pasta base, pero se envió a personal de la Sección de Investigación Policial para su pericia.

Exhibido set fotográfico ofrecido en Otros medios de prueba N° 2, reconoció el envoltorio, tipo ovoide, con una sustancia café en su interior y su pesaje de 20.5 gramos.

Refirió, a instancias de la defensa, que en ocasiones se componían estas patrullas mixtas, con personal de seguridad municipal y carabineros. En este caso iban dos funcionarios de Carabineros y un funcionario municipal que era el conductor cuyo nombre no recuerda.

Su intención es hacer su trabajo, de forma lo más completa posible, y eso implica dejar registro de todo lo efectuado, por eso, prestó declaración como oficial diligenciador en esta causa, en la comisaría y firmó su declaración. Luego le tomó la declaración al suboficial Loyola.

Enseguida la defensa, evidenció una contradicción en relación a lo referido por el testigo, porque según admitió la fiscal, en la carpeta investigativa no existía una declaración policial del testigo Moreno. No obstante lo anterior, el testigo continuó siendo contra interrogado por la defensa y planteó que lo que lanzó esta persona en definitiva no fue encontrado, solo lo vieron in situ, cuando iban pasando. No recordó si se levantaron cámaras del sector y no se levantó como evidencia algún registro audiovisual desde Gendarmería. Tampoco recuerda haberle tomado declaración al funcionario municipal que los acompañaba ese día.

Preciso luego que todas las diligencias policiales generalmente se hacen después de darle cuenta al Ministerio Público del procedimiento para ver si hay algún requerimiento. No debían comunicarse con Gendarmería como requerimiento contenido en algún protocolo de actuación ante este tipo de delitos, sin embargo, ese era el fin del patrullaje comunal, intentar detectar a estas personas tirando la pelota.

Para efectuar el procedimiento, solo se bajaron ellos del móvil e intervinieron, mientras que el funcionario comunal se mantuvo al interior del vehículo como chofer.

En similares términos declaró el sargento segundo **Patricio Loyola Aravena**, de 16 años de experiencia que coincidió en la fecha, la hora y el cometido, que decía relación con la modalidad de delito mencionada por el cabo Moreno. Refirió que iban pasando por fuera de la Ex penitenciaria, cuando divisaron a un sujeto vestido de casaca de tres colores blanco, rojo y otro color azul o negro, lanzando objetos hacia el interior del recinto penitenciario desde el bandejón central, precisando que ellos iban por la vía pública hacia el poniente. Que esa persona no se percató que iban ellos cuando lo divisaron, de forma tal que se bajaron rápidamente y lo fiscalizaron. Esa persona era de nacionalidad venezolana y les indicó que no tenía identificación, no les señaló nada y lo trasladaron a la unidad policial, lo registraron y mantenía una pelota tipo ovoide envuelto en papel alusa entre sus vestimentas. Lo registraron y obtuvieron un número de cédula venezolana y se indicaba una causa y número de identidad venezolano. No tenían sistema biométrico funcionando, por lo que recurrieron a la Policía de Investigaciones que les indica que esa persona tenía una orden de expulsión vigente y una causa por un delito similar. También tenía un rut chileno que él nunca les entregó.

Al verificar la especie que mantenía entre sus vestimentas, se trataba de un ovoide contenedor de una sustancia similar a droga, color café, que al peritaje realizado resultó ser pasta base de cocaína.

Ya había lanzado un objeto al interior del centro penitenciario y en ese horario ya no hay audiencias, no hay gente, no hay comercio y no es un lugar dónde uno va a pasear, por eso lograron ver que tiró algo.

Exhibido set N° 1 de Otros medios de prueba, reconoció las vestimentas del acusado ese día, chaqueta con líneas horizontales rojo, blanco y azul oscuro más jeans y zapatillas, además de ratificar el set fotográfico relativo a la droga incautada y su pesaje.

Aclaró que esta persona se negó a identificarse en reiteradas ocasiones y en la unidad, verificaron que él mantenía un documento entre sus vestimentas, similar al que le entregan por citaciones a los tribunales, aparecía identificada una causa donde figuraba su nombre y un rut venezolano.

Siendo contrainterrogado comentó que el funcionario municipal solo transporta al personal policial, no interviene en el proceso y que no recordaba si le tomó declaración o no.

Estaban patrullando para prevenir que ocurrieran ciertos delitos porque la idea es prevenir ese tipo de delitos. Esa persona no se percató de su presencia.

Como está interesado en que se resuelva de la mejor manera posible las causas, es importante dejar registro de todo porque de esa manera se puede informar al Ministerio Público para que ordene determinadas diligencias de investigación. No levantó eventuales registros de cámaras de seguridad porque aquello constituye una diligencia de investigación que dispone la fiscalía.

No recuerda haber entrevistado a funcionarios de Gendarmería sobre eso.

No pudo apreciar la forma del objeto que ya había lanzado, ni en sus colores y dimensiones pero era un objeto que iba envuelto en plástico. No se levantó evidencia del objeto que fue lanzado.

Tras no identificarse, lo trasladaron a la comisaría donde al registrarse en las vestimentas, notaron que tenía un documento que era una citación judicial por causa pendiente donde se registraba un DNI

venezolano y ahí recién él hizo presente esa causa y el DNI que estaba en el documento.

Aclaró que la hora del patrullaje depende del número de personal de carabineros y si hay o no patrulla disponible y la focalización del patrullaje se decide dependiendo del número de denuncias. En ese tiempo estaba marcando ese sector, pero a veces pasa que marca el barrio Meiggs, por ejemplo, como punto rojo y sacan focalización.

Finalmente el funcionario **NICOLAS CISTERNAS DURAN** dijo pertenecer a la Sección de Investigación policial de Carabineros y haber realizado una prueba de campo de una sustancia que parecía ser droga. Se le aplicó la coca test, prueba de orientación química que arrojó positivo para pasta base de cocaína, con un leve color ocre que tiene relación con la pureza de la droga y pesó 20gramo, 500 miligramos que le fue entregada bajo NUE 3224491.

De esta manera, el tribunal pudo identificar que, pese a que la defensa instó por desacreditar al testigo Néstor Moreno pues, en su concepto, habría faltado a la verdad al afirmar que en la carpeta investigativa constaba una declaración suya que le habría sido tomada en la comisaría, verificándose que no era así, el testigo igualmente pudo reconocer que no pudo comprobar qué era y qué características tenía el objeto que antes habría lanzado el detenido hacia el recinto penitencial y donde cayó en definitiva, precisión que siendo favorable a la defensa, demuestra su objetividad. Asimismo, su declaración fue corroborada con los dichos del sargento Loyola y se condice con la demás prueba de cargo, toda vez que presentó consonancia con las fotografías exhibidas, la prueba de orientación de la que dio cuenta el testigo Cisternas y la posterior prueba documental y pericial en relación al específico número de evidencia bajo el cual fue rotulada la especie incautada.

Respecto a la supuesta infracción al artículo 85 del Código Procesal Penal alegada por la defensa, el tribunal rechazará dicha alegación, toda vez que la prueba de cargo dio cuenta de un indicio que fue observado por los funcionarios de carabineros, de que en ese momento se estaba cometiendo un delito o se estaba disponiendo a cometer por parte del acusado. Fue importante tener presente que el patrullaje que efectuaban los funcionarios Loyola y Moreno estaba fuertemente determinado por la necesaria fiscalización focalizada en ese sector, dada la cantidad de denuncias que existía en relación, precisamente a la conducta observada. El sargento Loyola fue capaz de precisar que, siendo las cinco de la tarde aproximadamente, en la zona disminuye la presencia de transeúntes porque no es hora de audiencias en los tribunales del centro de justicia, ni hay comercio ambulante en el sector, de manera que fue sencillo detectar la presencia de esta persona lanzando algo. Esta situación era altamente compatible con aquél delito que motivaba el patrullaje policial en ese preciso lugar, es decir, la necesidad de prevenir y pesquisar el lanzamiento de objetos con forma de pelota hacia el interior de la cárcel que pudiera constituir un delito en el marco de la ley 20.000 de tráfico de drogas. De esta manera, carabineros efectivamente estaba facultado a controlar la identidad del sujeto, de conformidad a lo previsto en el artículo 85 del Código Procesal Penal. En ese contexto, es decir, durante el control de identidad en relación a la conducta ejercida en ese momento por el individuo, frente a su negativa reiterada de proporcionar su identidad, enfatizándose en que ni siquiera proporcionó un nombre, mucho menos un documento que lo acreditara, el procedimiento derivó en una detención producto de la comisión de la falta penal de ocultamiento de

identidad, establecida en el artículo 496 número 5 del Código Penal, norma a la que expresamente se remite la anterior, precisamente en estos casos. En ese sentido, al ser conducido a la comisaría y procederse a la revisión de sus vestimentas, el personal policial se encontraba debidamente facultado para actuar en el contexto de una detención por un delito-falta. En consecuencia, la incautación de la droga encontrada entre sus vestimentas, tras su revisión, no fue una actuación ilegal o vulneratorio de garantías del detenido, como sugirió la defensa.

A ello se suma que el artículo 85 del Código Procesal Penal prescribe que durante este procedimiento, sin necesidad de nuevo indicio, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente.

Por otro lado, también se alegó que no existió corroboración porque no se tomó declaración al funcionario municipal que conducía la patrulla ni se empadronó a eventuales otros testigos. Sin embargo, los funcionarios policiales explicaron que el funcionario municipal sólo conducía el vehículo y no participó del procedimiento, siendo solo ellos los que descendieron del vehículo para fiscalizar al sujeto que divisaron la acción descrita. Sumado a lo anterior, la conducta observada por los funcionarios policiales se vio ratificada por el hallazgo obtenido desde la revisión de las vestimentas del acusado que coincidió plenamente en cuanto a las características de los objetos denominados “pelotas”, modalidad de delito que constituía precisamente la razón del patrullaje preventivo focalizado en la zona. En relación a la presencia de otros testigos o consumidores, sólo cabe señalar que el sargento Loyola fue especialmente explicativo en relación al horario y a la poca presencia de público o transeúntes a esas horas de la tarde.

Sin embargo, el tribunal compartió la apreciación de la defensa en cuanto que los funcionarios de carabineros no lograron divisar y corroborar su el objeto lanzado por el acusado logró ingresar al recinto penitenciario, traspasando la muralla de contención y otros eventuales mecanismos de seguridad existentes, y que haya consistido en una determinada cantidad de droga ni cual ni su pesaje ni pureza, porque no se efectuó indagación alguna a ese respecto.

Ahora bien, la observación de la conducta previa, esto es, lanzar algún objeto hacia el recinto penitenciario, era altamente indiciaria de estar intentando ingresar objetos a la cárcel de una manera irregular, sin pasar por los mecanismos de control que se disponen por parte de la autoridad penitenciaria al efecto. El hallazgo, en estos términos, de un objeto con forma ovoide, que en su interior tenía pasta base a granel, apelmazada, es indiciario de que la droga encontrada en poder del acusado estaba pre-ordenada al tráfico y no al consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo como planteó el acusado y su defensa. No fue suficiente para constituir una duda razonable, que el acusado refiriera la forma de consumo de la pasta base ni el tiempo de duración de los efectos de la droga en su organismo, pues dicha información general, es posible extraerse desde otros medios, distintos de la experiencia personal, de manera que no es concluyente en relación a un real consumo habitual de pasta base de cocaína para justificar su porte en la vía pública. Tampoco fueron certeros, precisos y contrastables sus dichos en cuanto a que lo

habría adquirido recientemente, previo acuerdo con el vendedor por una plataforma o sitio web pues no proporcionó antecedentes concretos al respecto.

Finalmente, en cuanto a la ocultación de su identidad, se desestima lo referido por el abogado defensor en cuanto a que el acusado habría sido quien proporcionó voluntaria y espontáneamente el documento a través del cual se pudo llegar en definitiva a su identificación, previas consultas a la Policía de Investigaciones, porque lo realmente acreditado fue que se encontró el referido documento por carabineros, en el contexto de su revisión corporal, en la unidad policial, luego de ser detenido precisamente por negarse reiteradamente a identificarse.

Conjuntamente y en forma complementaria, se incorporó prueba documental y pericial de conformidad a los artículos 333 y 315 del Código Procesal Penal, que presentó plena consistencia con las circunstancias expuestas por los testigos de cargo y que tenían la finalidad de acreditar la naturaleza, cantidad y pureza de la sustancia incautada en el procedimiento. A saber, se acompañó:

1.- Acta de Recepción N° 3067/ 2023, de fecha 05.05.2023, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, correspondiente a NUE 3224491, en que se describe **cantidad recibida 19 gramos netos**, presunta sustancia: cocaína, peso bruto 20,4.

2.- Oficio Reservado N°8878, de fecha 26.05.2023, del Instituto de Salud Pública, por medio del cual se remitió a la Fiscalía Centro Norte protocolo de análisis, correspondiente a NUE 3224491.

3.- Protocolo de análisis químico e Informe de peligrosidad de la sustancia del NUE 3224491, emitido con fecha 26.05.2023, por el perito químico del ISP René Rocha Barrasa en que informa que la sustancia **es cocaína base al 78%**.

Las conclusiones que se constatan en dicha pericia y documentos son fidedignas al provenir de análisis estandarizados efectuados por funcionarios públicos expertos y competentes, resultando plenamente consistente con el mérito del resto de las pruebas producidas en juicio.

NOVENO: Calificación jurídica y participación. Que los hechos dados por probados y consignados en el párrafo séptimo, constituyen los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4° de la ley 20.000, en relación con lo dispuesto en el artículo 1° de la misma norma legal y de la falta penal establecida en el artículo 496 N°5 del Código Penal.

En primer lugar, el inciso primero del artículo 4° de la ley 20.000, sanciona al que, sin la competente autorización, posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencias física o psíquica de materia primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1°, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico, o a su uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo.

Por cierto, dicho delito requiere que el objeto material lo constituyan “pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1°, capaces o no de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”, que se describen y clasifican en los artículos 1° y 2° del Reglamento de la Ley N° 20.000. Así las cosas, lo incautado fue **pasta base de cocaína**, una sustancia capaz de

producir daños considerables a la salud de la Nación, según se constatará mediante la prueba pericial introducida en juicio, consistente en los protocolos de análisis químico y sus informes de efectos y peligrosidad, respecto a NUE 3224491. Por otra parte, la Ley N° 20.000, en su artículo 63, ha establecido que será un reglamento el que señale las sustancias a que se refiere el artículo 1° del referido cuerpo legal. A tal efecto, el D.S. 867 del año 2008, clasifica las sustancias estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica en dos listas (artículos 1° y 2°), dependiendo de si son capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud o no, haciendo expresa mención a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 1° de la Ley 20.000. La cocaína se encuentra contemplada en el artículo 1° del citado Reglamento, entre aquellas drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas que son capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

En lo medular, el tipo penal de tráfico ilícito de drogas conlleva para el persecutor, la obligación de acreditar que se han ejecutado ciertas acciones o conductas constitutivas de tráfico o pre-ordenadas al tráfico, de una determinada sustancia o especie vegetal enunciada en dicho reglamento. Como se desprende de lo razonado en los acápites precedentes, del análisis particular y sistemático de los medios de prueba, se logró acreditar la conducta típica contenida en el artículo 4° de la ley 20.000, concretamente la acción de poseer dicha droga por el acusado Torres Randon quien se encontraba en la vía pública, en las inmediaciones de la ex Penitenciaría portando 19 gramos netos de dicha droga a granel, envuelta en plástico. De las especiales circunstancias de comisión, forma particular en que la droga venía oculta, con forma ovoide y su alta pureza, 78 %, se desprende que no estaba destinada a ser consumida en forma personal, exclusiva y próxima en el tiempo, no estaba dosificada sino que predispuesta de la forma en que usualmente se lanza hacia los recintos penitenciarios para ser distribuida entre los internos.

En consecuencia, se acreditó su pre-ordenación al tráfico y no se justificó que haya sido para su consumo, en los términos contemplados en el artículo 4° de la ley 20.000. El acusado ejecutó de manera inmediata y directa el delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Código Penal, al estar portando y poseyendo dicha droga. Igualmente la conducta logró subsumirse en el tipo penal en cuestión, desplazando la figura principal del artículo 3° de la referida ley, toda vez que se trata de una cantidad exigua de droga, 19 gramos netos, por lo que consecuentemente se castiga en base a la figura privilegiada del artículo 4°, ambos de la ley 20.000.

En cuanto al delito falta de ocultación de identidad, el artículo 496 N°5 del Código Penal establece que sufrirán la pena de multa de 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales el que ocultare su verdadero nombre y apellido a la autoridad o a 1 persona que tenga derecho a exigir que los manifieste o se negare a manifestarlos o diere domicilio falso.

La conducta de Torres Randon se encuadra en dicho precepto toda vez que en los hechos se negó injustificada y reiteradamente a proporcionar su nombre, motivado por el hecho de tener una causa pendiente y para efectos de no ser detenido. Dicha conclusión se refuerza desde que el propio artículo 85 inciso 5° del Código Procesal Penal, establece que a propósito del control de identidad, si la persona se niega a acreditar su identidad o se encuentra en la situación indicada en el inciso anterior, se

procederá a su detención como autora de la falta prevista y sancionada en el artículo 496 N° 5 del Código Penal.

DÉCIMO: Calificante del artículo 19 letra h) de la ley 20.000.

Que si bien el persecutor invocó en su acusación la **agravante de la letra h) del artículo 19 de la ley 20.000**, que aumenta en un grado la pena en caso de que **el delito se haya cometido** en un centro hospitalario, asistencial, **lugar de detención o reclusión**, recinto militar o policial, conforme lo ha desarrollado la doctrina, lo que se sanciona especialmente es el valerse de la multitud de personas que dichos lugares suponen, para distribuir más fácilmente la droga, lo que implica por una parte la posibilidad de pasar inadvertido en el tumulto y por otra, poner en riesgo la salud de un mayor número de personas. (Politoff, Matus y Ramírez, Lecciones de Derecho Penal, parte especial, pp. 618) La razón de la agravación del castigo es precisamente que se trate de un lugar de detención o reclusión ocupado por una aglomeración, en este caso de reclusos. Por otro lado, la difusión y consiguiente consumo de drogas en la cárcel, sin duda atenta contra el proceso de reinserción que subyace o debiera traer aparejada la imposición de la pena en cualquier recinto penitenciario, provocando por el contrario, alteración en la convivencia y desobediencia del orden administrativo, incrementando los índices de peligrosidad y violencia en el mismo, contraviniendo los objetivos que el Estado debe propender alcanzar en favor de los mismos internos cuya seguridad e integridad, en dicho ámbito, está bajo su estricta custodia.

No obstante, en este caso en particular, no se vislumbra la concreción de la puesta en peligro del bien jurídico garantizado, toda vez que la tenencia de la droga fue detectada en la vía pública, fuera del recinto penitenciario y si bien se vio al acusado lanzando un objeto hacia el interior de la Ex Penitenciaría, lo cierto es que los aprehensores no estuvieron en condiciones de asegurar que esa intención se haya concretado y de esa forma haya ingresado droga al interior de dicho recinto, de suerte que en la práctica, la detección de la posesión de la droga entre sus vestimentas estando en la vía pública, fuera de un recinto de detención, el acusado no se prevaleció de un tumulto o aglomeración de personas para facilitar su impunidad. El mayor valor de la pena que supone la agravante lo constituye este aprovechamiento de condiciones que permita o favorezca la comisión del ilícito en condiciones que dificulten la sindicación de quien lo comete, al mismo tiempo que signifique una distribución de la droga a un número indeterminado de personas, en este caso, privadas de su libertad, todo lo cual no ocurrió en la especie porque el delito se detectó en una etapa previa, de mera posesión o porte y en condiciones en que el acusado se encontraba solo, de modo que no es concurrente la circunstancia calificante en comento.

UNDÉCIMO: Audiencia de determinación de penas. Que tras dictarse el veredicto condenatorio, se llevó a efecto la audiencia de determinación de penas en que la fiscal sustentó que perjudicaba al acusado la circunstancia agravante de reincidencia específica del artículo 12 N°16 del Código Penal. Para ello incorporó el extracto de filiación y antecedentes donde consta la anotación relativa a causa RUC 2100040108-8, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en que fue condenado como autor del delito de tráfico sustancias y estupefacientes del artículo 3° de la ley 20.000, consumado por resolución, de fecha 24 de

noviembre de 2021, en que fue condenado a **tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, libertad vigilada intensiva y multa de 1/3 de UTM**. Asimismo, incorporó la sentencia de la causa RUC 2100040108-8, dictada por la magistrada Marcia Irene Figueroa Astudillo, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en que en su parte declarativa, señala que se condena a Rafael Torres Rondón a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales y al pago de una multa de un tercio de unidad tributaria mensual, por su responsabilidad como autor del delito de tráfico de sustancia y estupefaciente, previsto en el artículo 3° y 1° de la ley 20.000, ocurrido en la comuna de Santiago, **el 13 de enero de 2021**, que se encuentra en grado de ejecución consumado. La sentencia está debidamente suscrita y se encuentra también certificada la ejecutoriedad de ésta.

Respecto a dicha circunstancia agravante la defensa no efectuó argumentación en contra.

Con lo antes consignado, unido a los hechos establecidos en el cuerpo de esta sentencia, se advierte que no ha transcurrido el plazo de prescripción de 10 años establecido en el artículo 104 del Código Penal, tratándose de una pena de crimen, razón por la cual, corresponde considerar la referida agravante en la determinación de la actual condena.

Por su parte la defensa invocó en favor del sentenciado la circunstancia atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, fundado en que su representado prestó declaración, se situó en el lugar y horario de los hechos, dando cuenta de circunstancias y partícipes de la detención, reconociendo la posesión de una sustancia que sirvió para su condena. También declaró para su identificación. En ese entendido, pidió que se compensaran racionalmente las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal concurrentes y recorriendo toda la pena en su extensión, se aplicara el mínimo de la pena, esto es, 541 días, porque además la extensión del mal causado fue mínima.

En tanto la fiscal se opuso a la atenuante señalada porque el acusado no declaró antes, su versión fue exculpatoria y el tribunal arribó a otra conclusión.

Resolviendo respecto a la referida atenuante de responsabilidad penal, el tribunal la desechó al entender que no es procedente, toda vez que la versión que aportó el sentenciado de los hechos, en instancias de juicio, no estuvo motivada por un afán colaborativo, cooperador o esclarecedor, sino que acomodaticio para sustentar una hipótesis alternativa que en definitiva fue descartada con la valoración de la prueba de cargo. En cuanto a que se ubicó en el lugar de los hechos y que reconoció que mantenía en su poder la droga por la cual fue condenado, fueron circunstancias detectadas en situación de flagrancia por personal de Carabineros, de manera que no constituyen un aporte relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Que perjudicándole una agravante en relación al delito de tráfico de pequeñas sustancias de estupefacientes, del artículo 4° de la ley 20.000, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del Código Penal, el tribunal descartará aplicar la pena en el grado mínimo, imponiéndose en el minimum del grado máximo de la pena asignada, frente a la menor extensión del mal causado, efectuando una rebaja en la pena de multa

asociada, toda vez que el acusado ha permanecido privado de su libertad y deberá cumplir la pena de manera efectiva.

De igual forma, se impondrá la pena de multa por la falta de ocultación de identidad, sin que a su respecto sean procedentes circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Finalmente, no se condena en costas al sentenciado por encontrarse privado de su libertad y presumírsele pobre para este efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales.

Que por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 1, 7, 12 N°16, 14 N°1, 15 N°1, 18, 30, 38, 47 y ss., 50, 67, 68, 69, 70 y 496 N°5 del Código Penal; artículos 1°, 2°, 45, 47, 85, 130, 297, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; artículo 1°, 4°, 41, 43, 45, 46, 50 de la Ley N°20.000, en relación con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 867 de 2007, del Ministerio del Interior, que aprueba el reglamento de la ley N°20.000;

SE DECLARA:

I.- Que SE CONDENA a **BRAYAN RAFAEL TORRES RANDON**, ya individualizado, a la pena de **3 años y un día de presidio menor en su grado máximo**, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de **1 Unidad Tributaria Mensual**, por su responsabilidad como autor de un delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4° de la ley 20.000, cometido el día 4 de mayo de 2023, en la comuna de Santiago.

II.- Que, asimismo SE CONDENA a **BRAYAN RAFAEL TORRES RANDON**, a pagar la multa de **2 Unidades Tributarias Mensuales** como autor de la falta de ocultación de identidad, del artículo 496 N°4 del Código Penal, cometido el día 4 de mayo de 2023.

III.- Que, no reuniéndose los requisitos de la ley 18.216, deberá cumplir la pena corporal impuesta de manera completa y efectiva, abonándose en su favor todo el tiempo que ha permanecido privado de su libertad en razón de esta causa, que desde el día de su detención hasta esta fecha suman un total de **429 días**, según consta del certificado de la ministra de fe de este tribunal.

IV.- Que las multas impuestas, podrán pagarse en hasta 12 parcialidades iguales y sucesivas, comenzando el quinto día del mes siguiente al que este fallo quede ejecutoriado y el no pago de una cuota hará exigible el total de lo adeudado.

V.- Que se decreta el comiso de las especies incautadas en este procedimiento. En relación con el destino de esas especies, deberá procederse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 20.000.

VI.- Que no se condena al sentenciado al pago de las costas de la causa.

VII.- Dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970, para lo cual, se tomará al condenado Torres Randon, las muestras

biológicas necesarias para determinar su huella genética e incluirla en el registro de condenados.

Regístrese y comuníquese, y ejecutoriada que sea la presente sentencia, remítase al Juzgado de Garantía de Santiago que corresponda, para su cumplimiento.

Se deja constancia que no existen elementos de prueba en poder de este tribunal que deban ser devueltos a los intervinientes.

Redactada por la Juez Carolina Escandón Cox.

RUC N° 2300487212-6

RIT N° 207-2023

Pronunciada por el **CUARTO TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO** en sala integrado por las magistradas Cecilia Toncio Donoso, como juez presidente de sala, Irene Rodríguez Chávez, como juez integrante y Carolina Escandón Cox, la primera y tercera titulares de este tribunal y la segunda juez destinada.